

días después presentó su renuncia indeclinable. En una entrevista al diario "La Nación" (19-3-98) el doctor Enrico Stefani dijo, entre otras declaraciones, que "hubo una maniobra orquestada" por gente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación para que no diga la verdad de su renuncia y dijo sentirse "amordazado". Además, que "sufrió continuas presiones políticas e injerencias" por parte de la secretaría antes mencionada para "designar investigadores cuyos nombramientos habían sido denegados por la Junta de Calificaciones".

Ante esta realidad, solicito informes a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación sobre los motivos de la renuncia del titular del Conicet y que se invite al doctor Stefani a concurrir a la Comisión de Ciencia y Tecnología para que exponga los motivos de su renuncia a la titularidad de la entidad científica.

Las declaraciones vertidas por el ex presidente del Conicet dan lugar a esta iniciativa, y es por ello que se solicita la aprobación del presente proyecto.

Ricardo E. Lafferrière.

—A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º — Modifícase el artículo 119 del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente forma: "Será reprimido con reclusión o prisión de 6 a 15 años, el que tuviere acceso carnal con persona de uno u otro sexo en los casos siguientes:

1. Cuando la víctima fuere menor de 12 años.
2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de razón o de sentido, o cuando por enfermedad o cualquier otra causa, no pudiese resistir.
3. Cuando se usare de fuerza o intimidación.

Se considerará equiparado al acceso carnal la práctica del sexo oral en las situaciones previstas en el presente artículo.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Luis Rubco. — Norma Godoy.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Desde los albores de nuestra jurisprudencia y doctrina existen encontradas opiniones con relación a encuadrar la conducta del sexo oral como violación o como corrupción e inclusive como abuso deshonesto, generando tales interpretaciones desigualdad ante la ley, tanto para víctimas como para justiciables, que repugnan nuestra Ley Fundamental.

Al margen de ello, los muy versados fallos que sostienen las distintas posturas, a pesar de la base científica que poseen, no logran satisfacer la protección con la que debe contar la sociedad frente a esta modalidad tan especial de atentar contra la libertad sexual de las personas o de vulnerar la indefensión en que se encuentran aquellas

privadas de razón o que por su edad no puedan resistir el hecho.

Estoy convencido de que, sin perjuicio del respeto que inspiren los distinguidos jueces y autores que se han extendido sobre el tema, es hora de poner fin a la arbitraria situación que crean tales disímiles posiciones.

No califico la situación de arbitraria como un recurso semántico, sino porque refleja una lamentable realidad que las distintas interpretaciones de un mismo acto han causado.

Ciertamente algunos de los aberrantes sujetos que han incurrido en este delito han sido beneficiados por la Justicia con un trato más benévolo que otros, llegando a favorecerse no solamente con la aplicación de penas más benignas, sino también con su excarcelación desde el inicio de la causa.

Contrarios sentimientos se producen en aquellas víctimas que observan cómo el delincuente recupera casi de inmediato la libertad, mientras que otras ven satisfechas sus aspiraciones de justicia.

De más está decir, que de ambos grupos me preocupa mucho más el mencionado en último término que el primero de ellos, si bien también éstos merecen el trato igualitario que consagran los artículos 16 y 75 inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, en función de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

No es posible mensurar, desde la óptica de la víctima, la vejación, la indignidad, el ultraje o el menoscabo que sufren; seguramente algunas podrán soportarlo con mayor entereza que otras, que quizás padezcan con mayor intensidad una vejación por sexo oral que una violación anal o vaginal.

También debo agregar que esta repugnante forma de delinquir equivale, de la misma forma que el acceso carnal, a un ataque a la libertad sexual de los individuos, libertad que Ricardo C. Núñez denomina reserva sexual, a la que considera "... como derecho del individuo a la incolumidad del consciente y voluntario trato de tipo sexual, es un elemento primordial de la libertad civil. Esta se vería gravemente coartada si el ordenamiento jurídico no defendiera a las personas contra los ataques a su reserva sexual...". (Tratado de Derecho Penal, tomo IV, página 213).

La violencia muestra, dentro de los delitos contra la honestidad, la característica específica de esta figura como atentado a la libertad sexual, al decir de Sebastián Soler, en *Derecho Penal Argentino*, tomo III, página 282.

Estos argumentos, unidos al afán de brindar una mayor protección a la sociedad, a través de un castigo más severo hacia este tipo de desviadas conductas, lo que me motiva a equiparar el sexo oral con el acceso carnal.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.

Luis Rubco. — Norma Godoy.

—A las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer y Minoridad.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º — Modifíquese el inciso c) del artículo 19 de la ley 24.241 el que quedará redactado de la siguiente forma:

- c) Acrediten un mínimo de diez (10) años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad.

Art. 2º — Modifíquese el artículo 20 de la ley 24.241 el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 20: El haber mensual de la prestación básica universal se determinará de acuerdo con las siguientes normas:

- a) Para los beneficiarios que acrediten treinta (30) años de servicios en las condiciones del inciso c) del artículo anterior, el haber será equivalente a dos veces y media (2,5) el aporte medio previsional obligatorio, al que se refiere el artículo siguiente;
- b) Para los beneficiarios que acrediten más de treinta (30) años de servicios en las condiciones preindicadas el haber será el equivalente de multiplicar el monto establecido en el inciso a) por un coeficiente que surgirá de dividir la totalidad de los meses aportados por el afiliado sobre trescientos sesenta;
- c) Para los beneficiarios que acrediten menos de treinta (30) años de servicios en las condiciones preindicadas el haber será el equivalente de multiplicar el monto establecido en el inciso a) por un coeficiente que surgirá de dividir la totalidad de los meses aportados por el afiliado sobre trescientos sesenta.

Art. 3º — Deróguese el artículo 34 bis de la ley 24.241.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Eduardo Santín. — Margarita R. Stolbizer. — Juan P. Baylac. — Cristina R. Guevara. — Miguel A. Bonino. — Alejandro M. Nieva. — Aurelia A. Colucigno. — María del Carmen Banzas de Moreau. — Alfredo H. Villalba.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Desde hace muchos años la mayoría de los ciudadanos tiene la sensación de que el sistema previsional es una pesada carga impositiva durante la vida activa y una pesadilla cuando se jubila.

La nueva ley previsional, no ha cambiado esta percepción, y en muchos de los casos la ha empeorado.

Peor aun es la situación de aquellos que habiendo trabajado toda una vida, cuando llegan a la edad de acceder al beneficio, se encuentran que no tienen los certificados de sus aportes, ya sea porque alguien los estafó quedán-

dose con el dinero que les retenía, o trabajaron en negro porque no tenían otra posibilidad.

Se debe partir de la base que lo normal es que la gente trabaje para vivir, por lo tanto, en muchísimos de los casos es el organismo de control el que está en falta, porque no ha hecho los controles pertinentes.

El Estado suele lavarse las manos sobre estas situaciones y condena a aquellos que fueron estafados, o no tuvieron otras posibilidades en su vida laboral que la resignación.

Los sistemas solidarios necesitan de todos, y para que todos estén es necesario generar mecanismos de confianza con los cuales la gente sienta que su esfuerzo sirve para algo.

Nos encontramos con muchos casos en los cuales al llegar a la edad jubilatoria no se tienen todos los aportes necesarios para acceder al beneficio, pero ahora el aportante no va a tener posibilidad de lograrlos y por lo tanto pierde lo que aportó quedándose con la sensación de que lo estafaron.

Esta sensación, que en la práctica es verdad, se traslada al grupo familiar que comienza a percibir que el sistema no sirve y la consecuencia inmediata es que cuando se pueda, hay que evadir.

Esto rompe la cadena solidaria, pero al mismo tiempo es injusto que alguien haya aportado al sistema y éste le da la espalda.

Con este proyecto de jubilación proporcional intentamos remediar alguna de las injusticias que el sistema tiene.

Este proyecto logra que los aportes que un afiliado al sistema haya hecho por encima de los 10 años, puedan ser utilizados para acceder al beneficio en forma proporcional. La ley previsional premia con una mejor jubilación a aquellos que más han aportado, por lo tanto si se ha superado la edad requerida se podrá acceder a un beneficio proporcional a los años aportados.

Esto va a permitir en primer lugar, el acceso de una prestación contributiva a muchos de nuestros mayores, con el merecido reconocimiento a su esfuerzo y sin crear soluciones facilistas que terminan agrediendo a los que han completado todos los aportes y al mismo tiempo va a disminuir la presión sobre los organismos que tramitan prestaciones no contributivas.

Porque la realidad nos muestra, que independientemente de que haya hecho o no aportes a determinada edad el Estado termina haciéndose cargo de ese sector de la población al que no puede ignorar.

Con el convencimiento de intentar avanzar en un sistema integrado de jubilaciones y pensiones más justo, es que proponemos la aprobación del mismo.

Eduardo Santín. — Margarita R. Stolbizer. — Juan P. Baylac. — Cristina R. Guevara. — Miguel A. Bonino. — Alejandro M. Nieva. — Aurelia A. Colucigno. — María del Carmen Banzas de Moreau. — Alfredo H. Villalba.

—A la Comisión de Previsión y Seguridad Social.